



Cámara Federal de Casación Penal

Registro N°: 398/24

///la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada para la presente por la jueza Angela E. Ledesma como Presidente, y los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar como Vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara Mariana Andrea Tellechea Suárez, a los efectos de resolver el recurso interpuesto en la presente causa n° **CFP 6732/2021/2/CFC1** del registro de esta Sala, caratulada: "**CRIVELLI, Julio César s/ recurso de casación**". Interviene representando al Ministerio Público Fiscal, el fiscal general doctor Mario A. Villar, y la defensa a cargo de los defensores particulares Jorge L. Landaburu y Juan Aráoz de Lamadrid.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultaron designados para hacerlo en primer término la jueza Angela E. Ledesma, y en segundo y tercer lugar los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, respectivamente.

La señora jueza **Angela E. Ledesma** dijo:

-I-

1°) La Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, el 17 de noviembre de 2022, resolvió: "**I. REVOCAR** la resolución apelada. **II. DECLARAR** que el hecho descripto en el requerimiento de instrucción realizado por la Sra. Fiscal, no satisface estándares mínimos para considerarlo delito merecedor de investigación penal, y en consecuencia **RECHAZAR** el mismo

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#36880932#410238379#20240502131641861

en los términos del artículo 195, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación. **III. DECLARAR la NULIDAD** del decreto de fecha 14/03/2022 por medio del cual se dio marcha e inicio a la investigación, y de todo lo actuado en consecuencia...”

Contra dicha decisión, el Fiscal General Adjunto, Carlos E. Racedo, interpuso recurso de casación, que fue concedido por el tribunal de origen el 6 de diciembre de 2022.

2º) El representante del Ministerio Público Fiscal se agravió de la falta de fundamentación de la decisión. Expresó que el objeto del requerimiento de instrucción es concreto y que la solución a la que se refiere es válida en los albores de la causa dando cumplimiento a todos los parámetros que prevé la normativa.

Señaló que no se ha dispuesto mecánicamente la instrucción pues el relato y sus antecedentes ponen en evidencia que la acción penal se instó en debido modo.

Sostuvo que no es lo mismo no identificar el hecho precedente que inferir que la descripción de la pieza examinada no constituye ilícito.

Marcó que cuando el juez estimó válida la actuación para el ejercicio de la acción penal, receptó su deber de manera automática.

Agregó que la nulidad dictada por los magistrados no se encuentra prevista dentro de los restrictivos motivos nulificantes, y que, si se entendiera que los hechos no constituyen delito, ello debería operar por otro canal, siempre y cuando de su sola descripción se desprenda la atipicidad.

Señaló que es en la indagatoria y en el requerimiento de elevación a juicio donde se perfecciona la plataforma fáctica y la acusación de acuerdo a aquello que



debe someterse a prueba en el debate y no en el incipiente estado en el que se encontraba la causa.

Expresó que lo resuelto por la Cámara es autocontradictorio y arbitrario pues se aparta de la solución normativa prevista para el caso.

En este sentido, consideró que la decisión impugnada en tanto arriba a la ausencia de una conducta de relevancia penal, cierra inapropiadamente la cuestión a indagar, "compeliendo a la magistratura de la instancia anterior a la realización de un análisis previo en abstracto e imaginativo en todos los casos, cuando la acción penal ha sido legalmente promovida y es patrimonio del Ministerio Público por mandato constitucional."

Agregó que "es una hipótesis -las que se plantean en todos los actos promotores- que no necesariamente arribará a condena pues los ausentes y necesarios elementos todavía no han sido colectados, en virtud de lo cual no dimana de manera indudable al menos hasta su materialización la atipicidad de la conducta."

Por todo lo expuesto solicita que se conceda el recurso y se revoque o anule la decisión impugnada.

Hizo reserva del caso federal.

3°) Durante el término de oficina, previsto en los arts. 465 -primera parte- y 466 del código de rito, se presentó el Fiscal General, Raúl O. Pleé, interinamente a cargo de la Fiscalía n° 1 y solicitó que se acoja el recurso de casación presentado por el fiscal y se case la resolución recurrida.

Expresó que los jueces de Cámara realizaron un incorrecto análisis de las constancias de la causa y se apartaron de la solución normativa y diseño institucional previstos para el caso al declarar la atipicidad del



comportamiento atribuido a Crivelli y anular el decreto que dio inicio a la investigación.

Refirió que la acción penal fue instada correctamente pues la fiscalía, que detalló debidamente el hecho descripto y su calificación legal, valoró la prueba de cargo recolectada hasta esa instancia y enunció concretamente las medidas que, a su criterio, eran indispensables para el descubrimiento de la verdad material.

Señaló que de la pieza procesal en cuestión se desprende la referencia a ciertas conductas específicas (administrar, disimular y procurar) y se hace hincapié en la existencia de bienes registrables que no habrían sido declarados -lo que da a entender la comisión de una posible evasión impositiva-, y en la necesidad de realizar diversas medidas a fin de comprobar la existencia del hecho delictuoso, establecer las circunstancias de tiempo modo y lugar, individualizar a los partícipes y comprobar la extensión del daño causado con el delito denunciado.

Al respecto, consideró que ello es suficiente para tener por válido el requerimiento de instrucción y, en consecuencia, también el decreto que dio inicio a la investigación en los términos del art. 195, CPPN.

En esta línea, concluyó que las exigencias de la defensa y de los camaristas al respecto lucen exageradas y parece que confunden los estándares de determinación del hecho y de prueba necesarios para dictar una condena con los requeridos para esta etapa embrionaria del proceso.

Agregó que la impugnación no versa sobre una valoración diferente de las circunstancias del caso, sino que se funda en la ausencia de una fundamentación adecuada, que vulnera específicos preceptos constitucionales (arts. 1, 18 y 33, CN) y configura un supuesto de nulidad absoluta en los términos de los arts. 166 y concordantes del CPPN.



Finalmente, añadió que una decisión diferente en este contexto podría, además, contradecir los compromisos adoptados por el Estado argentino en materia de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Por otra parte, se presentaron los defensores particulares del imputado, Jorge L. Landaburu y Juan Aráoz de Lamadrid, y consideraron que una interpretación armónica del art. 54 del C.P.P.F. permite vislumbrar que en el presente caso no se da ninguna circunstancia que habilite la revisión en instancia de casación de lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, por lo que debe declararse mal concedido el recurso intentado por la Fiscalía. Citaron jurisprudencia para sustentar su posición.

Por otro lado, sostuvieron que "el recurso de casación presentado por el Ministerio Público no se encuentra suficientemente fundado, en la medida que de modo alguno logra revertir los sólidos fundamentos expuestos por la mayoría de la Cámara de Apelaciones para dictar la resolución mencionada."

Adujeron que "contrariamente a lo afirmado por el Ministerio Público, el dictamen de requerimiento de instrucción formulado por la Fiscalía en esta causa reviste una legalidad meramente aparente, pero en modo alguno resulta sustancialmente válido, en la medida en que implica una intrusión injustificada de los órganos estatales en la esfera de privacidad de una persona sin justificativo alguno, en violación a los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional".

Añadieron que "de ninguna manera puede justificarse la promoción de una investigación penal que constituye una 'excursión de pesca', sin sustento alguno, por hechos indefinidos (no se sabe cuál es el supuesto ilícito precedente) por un período indefinido de tiempo (la Fiscalía dijo: 'Se investiga si Julio César Crivelli, desde



fecha incierta hasta la actualidad, administró, disimuló y/o procuró que se inserte en el mercado dinero de origen ilícito, en infracción al art. 303 del Código Penal’.”

Refirieron que la única prueba presente para justificar el inicio de la causa fue un listado de bienes existentes a diciembre de 2010, que no demuestra ninguna actividad de lavado ni origen ilícito de ningún dinero.

Indicaron que “si la hipótesis de investigación es la existencia de bienes propios sin declarar, solamente podría hablarse del delito de evasión tributaria, pero en modo alguno de lavado de dinero, como ha requerido la Fiscalía.”

Finalmente, señalaron que “no hay ninguna prueba que demuestre que los bienes en cuestión no se encuentren declarados ante la AFIP por Crivelli.” Por el contrario, se ha presentado en la causa una certificación contable que da cuenta de que todos los bienes del listado cuestionado se encuentran debidamente declarados por su defendido.

4°) El 6 de marzo de 2024, se celebró la audiencia prevista en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación. En dicha oportunidad, se presentó la defensa particular de Julio César Crivelli, quien ratificó los términos de su presentación en días de oficina y puntualizó en la gravedad que reviste haber dispuesto un allanamiento en el domicilio de su defendido sin justificativo alguno. Asimismo, consideró que no es posible llevar adelante una investigación que carece de elementos probatorios suficientes. Reparó en la afectación que dicha situación produjo en el honor de su asistido y solicitó que se ratifique la decisión de la Cámara de Apelaciones.

De esta manera, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

-II-



a. Liminariamente, interesa recordar que, según se consignó en el requerimiento de instrucción, "se investiga si Julio César Crivelli, desde fecha incierta hasta la actualidad, administró, disimuló y/o procuró que se inserte en el mercado dinero de origen ilícito, en infracción al art. 303 del Código Penal." En dicha oportunidad se señaló que "se inició el caso el 14 de octubre de 2021 en virtud de la extracción de testimonios ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, en el marco de la causa Nro. 11243/2016. De las constancias agregadas de aquel caso, surge que en el allanamiento realizado en el estudio jurídico ubicado en la Av. Alem 1074 de esta Ciudad se incautaron diversos documentos y correos electrónicos que presupondrían el armado y gestión de sociedades -algunas de ellas en paraísos fiscales- cuyo beneficiario sería Julio Cesar Crivelli. Asimismo, se desprende que el nombrado tendría un número considerable de bienes registrables no declarados, tanto en el país como en el extranjero, cuyo claro fin sería ocultarlos de los registros del organismo de fiscalización". En ese mismo acto se detallaron los bienes propiedad del nombrado y se requirió la realización de diligencias probatorias.

El 14 de marzo de 2022 el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8 tuvo por instada la acción penal y ordenó una serie de medidas, entre las que se destacan tareas de vigilancia sobre determinados inmuebles y el allanamiento de otros vinculados con el señor Crivelli.

El 7 de julio de 2022 los defensores Jorge L. Landaburu y Juan Aráoz de Lamadrid solicitaron el sobreseimiento de Crivelli. Consideraron que "la acción penal no fue legalmente promovida en este caso, ya que se realizó en violación a la garantía constitucional del

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#36880932#410238379#20240502131641861

debido proceso (art. 18 de la C.N.), sin prueba alguna, con una total indeterminación de los hechos, constituyendo lo que doctrinaria y jurisprudencialmente se conoce como una 'excursión de pesca'. Para fundar su postura explicaron que el requerimiento de instrucción no cumple las exigencias legales y, por lo tanto, es nulo. Por un lado, destacaron que el artículo 303, CP no estaba vigente a la fecha del hecho imputado y que la anterior redacción (art. 278, CP) no contemplaba los casos de autolavado. Por otro lado, expresaron que presenta una "total falta de definición concreta de hechos a investigar y (...) una total falta de prueba que sustente la promoción de la investigación penal".

El titular del Juzgado Federal N° 8 rechazó el planteo de la defensa por los argumentos expuestos en la resolución del 7 de septiembre de 2022.

En virtud del recurso de apelación presentado por la defensa, el 17 de noviembre de 2022, la Sala II de la Cámara Federal, por mayoría integrada por los jueces Boico y Farah, revocó la resolución del Juzgado N° 8, rechazó el requerimiento de instrucción por considerar que el hecho imputado no satisface estándares mínimos para considerarlo merecedor de investigación y declaró la nulidad del decreto del 14 de marzo por medio del cual se inició la investigación.

Dicho pronunciamiento motivó la impugnación fiscal ahora en tratamiento.

b. Sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 54 del CPPF, conforme el temperamento adelantado por mis colegas en la deliberación, simplemente diré que la vía deducida no puede prosperar, pues el recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes del decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza



para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó la Cámara y cuyos fundamentos no logran rebatir.

En el caso, no se advierten defectos de logicidad del decisorio ni transgresiones al correcto razonamiento que pudieran dar sustento a los argumentos invocados. La resolución ha sido sustentada razonablemente y los agravios del recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (C.S.J.N. Fallos 302:284; 304:415; entre otros); resolutorio que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchísimos otros).

Pero además, el representante del Ministerio Público Fiscal no ha demostrado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Nunzio" (Fallos, 328:1108).

Por lo expuesto, considero que corresponde declarar inadmisibile el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 444, 530 y cctes. del CPPN).

Tal es mi voto.

El señor juez **Guillermo J. Yacobucci** dijo:

A diferencia de cuanto se postula en el voto que lidera el acuerdo, considero que el presente remedio interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal luce admisible, en tanto, y por fuera de las consideraciones sobre el régimen procesal vigente, la parte introdujo debidamente la cuestión federal, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108). Esto es, la



afectación al debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio (arts. 18 y 120 de la CN), extremo que fue suficientemente acreditado por el impugnante. Es en estas condiciones que corresponde ingresar a su tratamiento.

Conforme se desprende de las constancias del sistema Lex100, la presente causa tuvo origen el 14 de octubre de 2021 a raíz de la extracción de testimonios que fuera ordenada por el juzgado federal interviniente.

Oportunamente, el 7 de marzo de 2022, la fiscalía formuló el correspondiente requerimiento de instrucción contra Julio César Crivelli, de acuerdo con lo previsto en los arts. 180 y 188 del CPPN. En esa presentación, la fiscal a cargo describió el hecho investigado en los siguientes términos: "Se investiga si Julio César Crivelli, desde fecha incierta hasta la actualidad, administró, disimuló y/o procuró que se inserte en el mercado dinero de origen ilícito, en infracción al art. 303 del Código Penal. Se inició el caso el 14 de octubre de 2021 en virtud de la extracción de testimonios ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, en el marco de la causa Nro. 11243/2016. De las constancias agregadas de aquel caso, surge que en allanamiento realizado en el estudio jurídico ubicado en la Av. Alem 1074 de esta Ciudad se incautaron diversos documentos y correos electrónicos que presupondrían el armado y gestión de sociedades -algunas de ellas en paraísos fiscales- cuyo beneficiario sería Julio Cesar Crivelli. Asimismo, se desprende que el nombrado tendría un número considerable de bienes registrables no declarados, tanto en el país como en el extranjero, cuyo claro fin sería ocultarlos de los registros del organismo de fiscalización". Asimismo, detalló los bienes referidos e identificó un recibo fechado en marzo de 2013 relacionado a la compra de terrenos en Bay

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#36880932#410238379#20240502131641861

Harbour, Florida, Estados Unidos, por un monto de 300 mil dólares estadounidenses. También, propuso la realización de diversas medidas de investigación.

Tras ello, el 14 de marzo de 2022, el titular del juzgado en trámite tuvo por instada la acción penal y ordenó medidas de prueba, como ser una serie de allanamientos y tareas de vigilancia.

En fecha 7 de julio de 2022, la defensa particular de Crivelli solicitó el sobreseimiento de su asistido, en el entendimiento de que *"la acción penal no fue legalmente promovida en este caso, ya que se realizó en violación a la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 de la C.N.), sin prueba alguna, con una total indeterminación de los hechos, constituyendo lo que doctrinaria y jurisprudencialmente se conoce como una 'excursión de pesca'".* Sustentó su pretensión en la nulidad del requerimiento de instrucción en tanto, a su criterio, no cumplía con las exigencias legales. Sostuvo que a la fecha del hecho el art. 303 del CP no se encontraba vigente y el art. 278 no contemplaba el "autolavado", mientras que existía una falta de definición concreta de los hechos a investigar y una carencia probatoria para promover la investigación.

El día 7 de septiembre de 2022, el juez federal rechazó el planteo defensivo.

En función del recurso de apelación interpuesto por la defensa, la mayoría de la Sala II de la Cámara Federal adoptó la decisión que ahora el recurrente cuestiona y que revocó la resolución de primera instancia. Así, resolvieron declarar que el hecho descripto en el requerimiento de instrucción no satisface estándares mínimos para considerarlo delito merecedor de investigación penal y, en consecuencia, rechazar el mismo en los términos del art. 195, segundo párrafo, del CPPN. También, se

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#36880932#410238379#20240502131641861

declaró la nulidad del decreto del 14/03/2022 por medio del que se dio marcha e inicio a la investigación, así como de todo lo actuado en consecuencia.

Ahora bien, de la lectura de los fundamentos expuestos por la mayoría de la cámara a quo a fin de sustentar la nulidad declarada y, en definitiva, la solución adoptada, observo que la decisión resulta arbitraria y, cuanto menos, excesiva en relación con los presupuestos que debe atender el inicio de una indagación penal.

En efecto, tras considerar la etapa inicial en la que se encuentra la presente investigación y que el requerimiento de instrucción cumple con los requisitos legales vigentes -puntualmente, los arts. 69, 188, 193 y 195 del CPPN-, comparto con el recurrente que la resolución cuestionada no constituye un acto jurisdiccional válido y debe ser revocada.

En el caso en estudio, como bien afirma el magistrado que quedó en minoría, el requerimiento de instrucción satisface, al menos mínimamente, las exigencias del artículo 188 del CPPN al describir someramente y en base a los elementos con los que se contaba en ese entonces los comportamientos que podrían ser reprochados a Crivelli. Tal como se reseñó, aquellos consistían en la posibilidad de que, a través de distintos actos, aquél hubiera procurado lavar activos provenientes de hechos ilícitos con el objetivo de darles apariencia de legalidad. Por ello, sostuvo que *"En este estado embrionario, tal descripción de los sucesos permite conocer con suficiente claridad cuáles son los extremos de la imputación que han dado lugar a la investigación, más allá de cómo pueda ir ampliándose o mutando -como es natural-, a raíz de su desarrollo posterior..."*.



De igual modo, con adecuado criterio allí se sostuvo que "Esa hipótesis fue sostenida a partir de lo que surge de una serie de archivos electrónicos que darían cuenta del posible armado y gestión de sociedades -algunas radicadas en paraísos fiscales- en las que el nombrado resultaría beneficiario. Su desencadenante, fue la extracción de testimonios dispuesta por el titular del Juzgado Federal nro. 7 cuando en la causa nro. 11243/2016 que instruye bajo la hipótesis de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos (por los que varios imputados ya se encuentran en la etapa de debate oral). Partiendo de ello, entonces, hay circunstancias que no pueden obviarse puesto que dan sentido a las referencias traídas a éste proceso y permiten contextualizarlas: 1) la denuncia se encuentra estrechamente vinculada a la relación entre una de las personas imputadas en aquella causa (seguida entre otros a R. L. N.) y la única mencionada en ésta (J. C. C.), y esa situación -en principio- se revela en los documentos remitidos en la denuncia; 2) una gran cantidad de la prueba evaluada en aquél expediente (en el que he venido interviniendo como juez de alzada desde sus inicios) provino de los archivos informáticos secuestrados a L. N. precisamente en la oficina que ocupaba en el estudio jurídico de C., y esa misma característica se habría repetido en autos".

Indiscutidamente, la pieza procesal contiene una descripción del hecho investigado en donde se hace referencia a conductas específicas, vinculadas a aquellas tipificadas en el art. 303 del CP, y a bienes registrables que no habrían sido declarados, amén de las medidas probatorias encaminadas a dilucidar y comprobar aquellas u otras ulteriores que pudieran surgir. Todo ello luce suficiente para tener por válido el requerimiento de

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#36880932#410238379#20240502131641861

instrucción y el decreto que dio inicio a la investigación en los términos del art. 195 CPPN.

Es en esas condiciones que considero que la decisión atacada encubre argumentalmente una trampa al exigir fijar al inicio de la investigación algo que, por su propia naturaleza, debería ser provisorio, mutable y modificable, hasta la formalización de la acusación.

Por tanto, corresponde recordar aquí que el propio código ritual establece que la finalidad de la instrucción radica en "*Comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad*" (art. 193, inc. 1, CPPN) y, a los fines de lograr ese objetivo trazado, una investigación penal necesariamente irá a experimentar modificaciones. Ello, puesto que el objeto no podrá ser considerado inmutable hasta, como se dijo, cumplir con la acusación.

Sin perjuicio de reconocer la naturaleza preliminar e incipiente de aquel acto del proceso, lo cierto es que, en el presente, se cumplió con lo normado por el art. 188 CPPN en tanto el impulso de la acción penal ya contenía la relación circunstanciada del hecho a instruir, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar establecidas.

Así entonces, mal puede exigirse, como desmedidamente pretende la mayoría de la cámara *a quo*, una determinación precisa o un conocimiento certero de la comisión de un hecho ilícito cuando el propio procedimiento ritual no lo exige.

Por ello, la decisión atacada exhibe una fundamentación sólo aparente y arbitraria, que equivale a la falta de motivación que, como causal de nulidad de los autos y sentencias, prevé el ordenamiento procesal en su art. 123 del CPPN.



En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución recurrida y devolver la causa para que se prosiga con el trámite de las presentes actuaciones, sin costas (arts. 470, 471, 530 y 532 del CPPN).

Así voto.

El señor juez **Alejandro W. Slokar** dijo:

Que, en las especificidades del *sub lite*, adhiere a la solución que propicia el colega preopinante, lo que así vota.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:**

HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, **REVOCAR** la resolución recurrida y **DEVOLVER** la causa para que se prosiga con el trámite de las presentes actuaciones, sin costas (arts. 470, 471, 530 y 532 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/19) y remítase al Tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Firmado: Angela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar

Ante mí: Mariana Andrea Tellechea Suárez.

